



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:08 horas del día 12 de mayo de 2015, estando reunidos 41 de los 52 miembros del Consejo General Universitario en el Salón del Consejo Universitario; bajo la presidencia del Rector General, Dr. José Manuel Cabrera Sixto, y estando en funciones la Secretaria del mismo Órgano de Gobierno, Mtra. Rosa Alicia Pérez Luque, dio inicio la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del Órgano de Gobierno de Mayor Jerarquía de la Universidad de Guanajuato, a la cual se convocó para desahogar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de presentes.
2. Declaración del quórum legal.
3. Toma de protesta al cargo de un nuevo consejero, de conformidad con el artículo 34 del Estatuto Orgánico.
4. "Revisión del Régimen de responsabilidades y sanciones de la Universidad de Guanajuato", en atención de la solicitud de miembros del Consejo General Universitario conforme a lo establecido por el artículo 40 del Estatuto Orgánico.

Punto 1 (Lista de presentes)

Conforme lo señala el artículo 39 del Estatuto Orgánico, la Secretaria verificó la lista de presentes mediante el registro de asistencia que personal adscrito a la Secretaría General fue llevando a cabo conforme los señores consejeros fueron ingresando al recinto; encontrándose reunidos 41 de ellos para dar inicio a la sesión.

Punto 2 (Declaración del quórum legal)

Habiendo sido informado por la Secretaria General, de la presencia de 41 de los 52 miembros del Consejo General Universitario, el Presidente declaró el quórum legal para dar inicio a la sesión, aunque posteriormente se fueron integrando a la misma otros consejeros hasta sumarse ocho más.

Punto 3 (Toma de protesta a nuevos integrantes)

Conforme lo señala el artículo 34 del Estatuto Orgánico, el Presidente del Consejo General Universitario tomó protesta al Dr. Alex Ricardo Caldera Ortega como nuevo integrante del Órgano de Gobierno de Mayor Jerarquía de la Universidad de Guanajuato, cargo que desempeña a partir del 27 de febrero del año en curso, representando al personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León.

Antes de dar paso al único punto deliberativo del orden del día, el Presidente, con fundamento en el artículo 46 del Estatuto Orgánico, designó escrutadores a la Lic. Luz Margarita Briones Andrade, representante del personal administrativo, y a Carlos Ezequiel Téllez Campos, representante de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del Campus Celaya-Salvatierra.

Punto 4 (Revisión del Régimen de responsabilidades y sanciones de la Universidad de Guanajuato)

El Presidente introdujo el tema informando al pleno que el 13 de febrero del año en curso, con base en lo establecido por el artículo 40 del Estatuto Orgánico, un grupo de consejeros hicieron llegar a la oficina de Rectoría General un escrito en el que le solicitaron que se convocara a una sesión extraordinaria del Consejo General Universitario con el propósito de atender el siguiente asunto: *"Diseño de un proceso de revisión del régimen de responsabilidades y sanciones de la Universidad"*



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

de Guanajuato de conformidad con la normatividad universitaria". A dicha solicitud se dio respuesta por parte del Secretario General, invitando a los firmantes a que se organizara un reunión previa para definir con mayor precisión el tema, así como para preparar los documentos que acompañarían a la convocatoria; sin embargo dicho grupo contestó que tal reunión no era necesaria y reiteraron su solicitud señalando que *"desde nuestro punto de vista, existen lagunas y vacíos en nuestra normatividad universitaria en tomo al tema de referencia, por lo cual consideramos que es un tema de relevancia para la vida institucional. En virtud de ello, consideramos necesario construir una agenda de trabajo desde el Consejo General Universitario, a fin de revisar y actualizar la reglamentación respectiva"*. En tal sentido, el Rector General propuso tomar el tema al análisis de la Comisión de Normatividad para que la misma formule una propuesta que sea discutida y, en su caso, aprobada por el pleno.

Habiendo dicho lo anterior, el Presidente, con fundamento en el artículo 44 del Estatuto Orgánico, preguntó a los consejeros si deseaban opinar al respecto, abrió un registro de las intervenciones y procedió a desahogarlas:

El Ing. Francisco Huerta Castillo, representante del personal académico de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato, pidió la palabra para dar lectura a un documento que, una vez presentado ante el pleno, lo entregó a la Secretaria del Consejo, mismo que a continuación se transcribe:

"H. Pleno del Consejo General Universitario:

En el año de 2008 se actualizó la normatividad existente desde la Ley Orgánica anterior, prácticamente sólo para sustituir términos de entidades y de autoridades. Al día de hoy no se ha revisado en su integridad y de fondo la normatividad derivada de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato vigente y su Estatuto Orgánico. Es por ello que a la fecha existen problemas de legalidad y aplicación de nuestra legislación universitaria.

Esta situación prevalece en gran parte del ámbito universitario. Por la trascendencia del caso, estimamos de suma relevancia abordar un tema de manera urgente: la actualización del sistema de responsabilidades y sanciones. La existencia de lagunas y vacíos normativos en esta materia, ha propiciado que la Contraloría General de la Universidad se exceda en sus funciones, lo cual se ha traducido en arbitrariedades, ilegalidades, afectaciones de derechos humanos e inseguridad jurídica para el personal académico y para algunas autoridades ejecutivas.

Lo anterior es una vulneración al Estado de Derecho, y con ello se perjudica a la institución en su conjunto. Desde luego, afecta a los profesores, pues ante un clima de hostilidad e incertidumbre, se aprecia una tendencia a optar por la jubilación. Por consiguiente, también resulta afectada la comunidad estudiantil, pues ella debe representar el principal ámbito de atención y ocupación de la planta académica, pero se merma cuando prevalecen la incertidumbre y la distracción en asuntos que en la mayoría de las ocasiones no deberían ocupar a los profesores.

Cabe hacer notar que la regulación del régimen de responsabilidades y sanciones en nuestra Casa de Estudios, fundamentalmente, se soporta en nuestra normatividad interna, en la legislación que regula la actuación administrativa de los servidores públicos (en un ámbito general) y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, en su artículo tercero, hace énfasis en la autorregulación de nuestro régimen, atentos al carácter de institución educativa pública autónoma. Es importante hacer notar el carácter autónomo de la Universidad, pues de ahí se deriva que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es de aplicación general y nuestra legislación universitaria es especial en razón de la diversidad y especificidad de las actividades que desarrolla el personal académico y los órganos de gobierno universitarios.



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

No obstante, éste es sólo el marco general. En estricto sentido, para poderse aplicar requiere de una regulación normativa específica, regulación que corresponde hacer al Consejo General Universitario (art. 16, fracción II de la Ley Orgánica). Pero, reiteramos, esa regulación no se ha hecho. Para evidenciar lo anterior referimos las siguientes

LAGUNAS Y VACÍOS NORMATIVOS

a) Para la aplicación de sanciones al personal académico, el artículo 85 de la Ley Orgánica, en lo conducente, establece:

"En los términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Orgánica, la reglamentación respectiva especificará las consecuencias derivadas de la infracción al marco normativo interno de la Universidad por parte del personal académico y de los alumnos".

Asimismo, dicho precepto faculta a las Comisiones de Honor y Justicia respectivas para la imposición de las sanciones. En la normatividad actual existen sanciones susceptibles de imponerse a los alumnos (art. 119 del Estatuto Académico). Para los profesores, se encuentran reguladas la amonestación y la suspensión de hasta por ocho días, sanciones que corresponden aplicar a los Directores de División o de las Escuelas del Nivel Medio Superior cuando aquéllos infrinjan alguna de las obligaciones que señala el Estatuto Académico (arts. 74 y 75 del Estatuto del Personal Académico). Pero, no obstante dicha regulación, falta normar las sanciones que pueden aplicar las Comisiones de Honor y Justicia.

b) En cuanto a las sanciones a las autoridades ejecutivas, nuestra legislación contempla la remoción, que procede de la siguiente manera: para el Rector General, Rectores de Campus, Director del Colegio del Nivel Medio Superior y Directores de División, corresponde a la Junta Directiva, a solicitud y por las causas graves que determine la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario (art. 18, fracción IV de la Ley Orgánica). La remoción de los Directores de Departamento, corresponde al Rector de Campus, por causa grave, a propuesta del Consejo Divisional. La remoción de los Directores de las Escuelas del Nivel Medio Superior, corresponde al Director del Colegio del Nivel Medio Superior, por causa grave, a propuesta del Consejo Académico del Nivel Medio Superior.

Ahora bien, en cuanto a las sanciones que se les pueda aplicar a las autoridades ejecutivas, además de la remoción, no existe regulación alguna. Y no pueden ser consideradas como personal administrativo, pues la Ley Orgánica no les otorga tal categoría (arts. 8 y 10), sino la de órganos de gobierno unipersonales. En tal virtud, no les resultan automáticamente aplicables las sanciones contempladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En todo caso, de dicha Ley se podrían derivar principios generales para la aplicación específica en los términos y condiciones de nuestra legislación interna. De lo contrario, estaríamos infringiendo la autonomía universitaria que nos concede la Constitución Federal.

Como ya lo señalábamos, las lagunas y vacíos antes referidos han dado lugar a que la Contraloría General de la Universidad, a nuestro parecer, incurra en irregularidades, abusos y excesos. A continuación señalamos algunos de ellos:

IRREGULARIDADES, EXCESOS Y ABUSOS COMETIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL

1. La Contraloría ha instaurado procedimientos disciplinarios al personal académico e impuesto sanciones, cuando dicho personal realiza funciones de índole administrativa sin tener la Contraloría facultades para ello. En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 60 de la Ley Orgánica, sólo le correspondería sustanciar los procedimientos y darle cuenta a la Comisión de Honor y Justicia correspondiente para que aplique la sanción estipulada en la reglamentación respectiva; reglamentación que no se ha elaborado. (Expediente: 13/2013).

Ahora bien, el hecho de que no exista tal reglamentación, de ninguna manera puede entenderse que entonces la Contraloría se arrogue facultades que la ley no le concede.



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

2. La Contraloría General se ha involucrado en los procedimientos de otorgamiento de cargas académicas de los profesores. Para tal efecto, ha invocado sus facultades en materia de fiscalización y rendición de cuentas, lo cual no es el caso; y si lo fuera, tendría que sujetarse a los lineamientos que al efecto definiera la Comisión de Vigilancia del Consejo General Universitario, tal y como lo señala la fracción V del artículo 59 de la Ley Orgánica. (Expediente: 27/2014 y pliego de observaciones y recomendaciones a la División de Ciencias Económico Administrativas. Ejercicio 2013/concluido en diciembre 2014).

Aun y cuando se apreciara loable la iniciativa de la Contraloría General de cuidar el patrimonio universitario y otorgarle transparencia a los procesos en los que participa el personal académico cuando realiza labores de gestión, en todo caso debería privilegiarse el mandato que le otorga la Ley Orgánica a dicha dependencia, en su fracción V del artículo 60: proponer la adopción de recomendaciones y medidas preventivas.

3. La Contraloría General, en sus resoluciones, ha descrito e impuesto sanciones inexistentes en nuestra legislación universitaria e incluso en legislaciones externas. Por ejemplo, exigir la devolución de emolumentos salariales por parte del personal académico. (Expediente: 13/2013).

4. La Contraloría General ha violado derechos fundamentales inherentes al debido proceso que deben regir en todo régimen sancionador. Por ejemplo, el derecho a una defensa efectiva y el de recurrir los actos de autoridad. Derivado de ello, los universitarios hemos tenido que acudir a instancias externas para hacer valer derechos humanos fundamentales. (Expediente: 28/2014).

5. La Contraloría General ha instaurado procedimientos disciplinarios a autoridades ejecutivas e impuesto sanciones a los mismos, sin tener facultades para ello. En sus actuaciones, para sustentar su injerencia, ha llegado a extremos paradójicos, como citar preceptos de normatividad que, precisamente, facultan a las Comisiones de Honor y Justicia, pero no a ella, para actuar en consecuencia. (Expedientes: 27/2014 y 02/2014).

Ante este estado de cosas, estimamos que es responsabilidad de todos los universitarios cuidar el patrimonio de nuestra Casa de Estudios y velar por que nuestras actividades se desarrollen adecuadamente, de modo que, cuando dichas actividades no las realicemos debidamente, se puedan aplicar las medidas conducentes en el marco del Estado de Derecho.

Es preocupante que no se puedan imponer medidas disciplinarias por lagunas y vacíos en nuestra normatividad. Pero resulta igual o más preocupante que ante ello la Contraloría General actúe discrecionalmente, autoimponiéndose atribuciones que no le corresponden, transgrediendo con ello el principio de legalidad que reza: "la autoridad sólo puede hacer aquello que la ley expresamente le permite".

Consideramos que, como integrantes del Consejo General Universitario, tenemos la imperiosa obligación de atender la problemática referida, acordes con el sentido propositivo, responsable y proactivo que singulariza a este órgano de gobierno universitario.

Es por ello que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 y 16, fracciones XVII y XIX de la Ley Orgánica; así como en el 11, 12 y 36 del Estatuto Orgánico; y demás relativos y aplicables de nuestra normatividad universitaria, sometemos al honorable pleno del Consejo General Universitario la siguiente propuesta de

ACUERDO:

1. Se solicite a las Comisiones de Normatividad, Vigilancia, y de Honor y Justicia, la revisión integral del régimen de responsabilidades y sanciones del personal administrativo, académico y de los órganos unipersonales de nuestra Universidad para que, derivado de ello, nos proponga la actualización normativa que se requiera.

2. Que mientras se realiza dicha revisión, la Contraloría General se abstenga de aplicar sanciones y suspenda los procedimientos instaurados, en los supuestos antes referidos.



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

3. Que la Contraloría General presente al pleno del Consejo General Universitario un informe, con la respectiva justificación, sobre las sanciones que haya impuesto en los últimos tres años al personal de nuestra Universidad y de aquellos procedimientos disciplinarios que se encuentren en marcha. Este informe se enmarca en las facultades que la Ley Orgánica le otorga a este órgano de gobierno para designar y remover al Contralor General (art. 16, fracción. XIV). Por lo cual, a su vez, serviría para, entre otros elementos, evaluar el desempeño de dicho funcionario."

Una vez leído el documento anterior, el Presidente dijo que hay coincidencia en que el tema debe ser analizado por las comisiones permanentes de Normatividad, de Honor y Justicia y de Vigilancia. Agregó también que habría que meditar en tomo a los otros dos puntos que se proponen como acuerdo, sobre todo el segundo. En tal sentido, propuso que se discutieran por separado los tres acuerdos propuestos.

El Dr. Ricardo Contreras Soto, Director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del Campus Celaya-Salvatierra, manifestó su sorpresa por lo que se afirma en varios apartados del documento. Dijo estar de acuerdo con que este es un espacio académico y que se tienen muchas facultades, pero la forma en que se discute los vacíos de la normatividad interna presenta contradicciones con leyes externas y no se trata de afirmar que la universidad es autónoma y por ello no le aplican éstas. En este sentido invitó a los consejeros a considerar que la institución es un organismo público descentralizado y como tal es sujeto de aplicación de leyes de orden federal y estatal, como las de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por ejemplo, donde están señaladas con mucha claridad cuáles son las responsabilidades de los universitarios como servidores públicos y es por ello que todos, principalmente quienes ostentan cargos de autoridad ejecutiva tienen que vigilar y conducirse con toda transparencia en el manejo de los recursos públicos y por tanto, tiene que haber una instancia de control al interior de la universidad.

El Presidente señaló que si bien el escrito que recién se leyó contiene muchas interpretaciones de la normatividad interna y de las leyes externas, también quienes no intervinieron en su elaboración pueden tener una infinidad de formas de explicar el sentido de las mismas y, por tal razón, se requiere llevar a cabo un ejercicio muy profundo de análisis al respecto, el cual deberán hacer las comisiones permanentes ahí propuestas. En virtud de lo anterior, y dado que muchos de los consejeros no disponen del documento ni de otra información, invitó al pleno a no desgastarse en una discusión estéril y únicamente adoptar el acuerdo de que sean esas comisiones quienes se alleguen de toda la información posible, se asesoren de todos los expertos en la materia, universitarios y externos, lleven a cabo un análisis concienzudo y elaboren la mejor propuesta al Consejo General Universitario.

El Mtro. Antonio González Arroyo, representante del personal académico de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, manifestó su total acuerdo con la intervención del Dr. Ricardo Contreras Soto, así como con lo expresado por el presidente, pues -afirmó- ambas coinciden plenamente con el espíritu las tres propuestas planteadas en el documento recién leído y, por tal razón, propuso adoptar los acuerdos ahí planteados.

El Dr. Luis Fernando Macías García, Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León, propuso definir si se adoptaría un solo acuerdo que contemplara los tres puntos propuestos, como un solo conjunto o, bien, si se discutía y, en su caso, se aprobaba cada uno de ellos por separado. Por otra parte, consideró plausible que un grupo de consejeros aborde este tipo de temas y presente sus propuestas al pleno, lo cual además es trascendental para la vida institucional porque le da a este órgano de gobierno un papel más proactivo; y por tal motivo les expresó su reconocimiento. Por último, propuso que, como refuerzo a las buenas prácticas en el



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

desempeño de los órganos colegiados, las comisiones se auxilien de expertos ajenos a la universidad calificados tanto en materia constitucional, como en regímenes especiales que atañen a la universidad como los de las responsabilidades administrativas, transparencia y rendición de cuentas, para llevar a cabo el análisis que se ha propuesto como acuerdo número uno en el documento aquí discutido.

El Presidente manifestó su acuerdo con la recomendación manifestada en la última parte de la intervención del Dr. Luis Fernando Macías García. Asimismo, consideró conveniente que la Contraloría General rinda el informe que se propone como acuerdo número tres en el documento leído por el Ing. Francisco Huerta Castillo; no así la propuesta número dos, de la que -dijo- no se cuenta con la información suficiente para estar en condiciones de adoptarla como acuerdo porque ese órgano de control tiene obligaciones legales que cumplir y éstas no se pueden detener, pues de ser así, entonces estaría infringiendo la ley, y dado que el Consejo General Universitario no tiene facultades que le permitan actuar por encima de las leyes federales y estatales que determinan las funciones de la contraloría, propuso eliminar del acuerdo el punto dos.

El Mtro. Jorge Alberto Romero Hidalgo, representante del personal académico de la División de Ciencias Económico Administrativas del Campus Guanajuato, se manifestó en contra de la propuesta del Presidente y, a nombre de los consejeros que solicitaron la celebración de esta sesión extraordinaria, indicó que preferirían mantener la propuesta tal cual fue leída, pues su esencia es justamente evitar que la contraloría siga violando la norma, y aclaró que en ninguna parte del documento se pide que ese órgano de control deje de hacer su trabajo, salvo los supuestos ahí planteados.

El Dr. Luis Fernando Macías García solicitó que se explicitaran los supuestos descritos porque la información aludida en el documento leído no fue hecho del conocimiento de todos los consejeros con la oportunidad que señala la normatividad interna, y las referencias a los números de expediente que ahí se mencionan no dicen nada y, por consecuencia, no se tendría plena certidumbre de lo que se estaría decidiendo. Por otra parte, opinó que no habría gran diferencia entre aprobar los tres puntos propuestos en un solo acuerdo o eliminar alguno de ellos porque si se violara alguna ley ajena a la universidad, la parte interesada tramitaría el recurso legal correspondiente y entonces la institución tendría que responder a ello.

El Presidente insistió en que tendría que eliminarse el punto dos porque de lo contrario -explicó- habría que entrar en un análisis más profundo para determinar en qué casos se pudiera estar violando alguna ley y en qué casos no, y para ello tendría que estar presente el contralor general para que pudiera explicar cuáles son las causas que han motivado las sanciones o los procesos aludidos en el documento, algunas de las cuales le han sido impuestas a consejeros presentes en la sesión, quienes, en su caso, tendrían que excusarse de intervenir en dicho análisis y en la correspondiente votación.

El Dr. Ricardo Contreras Soto argumentó que el Consejo General Universitario no tiene facultades para impedir que la Contraloría General lleve a cabo las funciones que le señalan leyes federales y estatales. Por otra parte, manifestó su acuerdo con la observación señalada por el Dr. Luis Fernando Macías en el sentido de que hizo falta contar con la documentación previamente al desarrollo de la sesión para estar en condiciones de acudir a discutir con argumentos y adoptar la mejor decisión.

El Mtro. Víctor Luis Muro Salinas, representante del personal académico de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del Campus Celaya-Salvatierra, reflexionó indicando que si se decidiera



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

eliminar el punto número dos y si efectivamente la Contraloría General estuviera cometiendo alguna arbitrariedad, entonces el Consejo General Universitario estaría permitiéndole cometer esos atropellos; al respecto precisó que no se le está pidiendo a ese órgano de control que suspenda definitivamente esos procesos, sino que únicamente los ponga en pausa en tanto se lleva a cabo el análisis de las comisiones. Por otra parte, solicitó al Ing. Francisco Huerta Castillo volver a leer el documento con el propósito de aclarar las dudas que han manifestado algunos consejeros durante sus intervenciones.

El Ing. Francisco Huerta Castillo contradijo el argumento del Dr. Ricardo Contreras Soto mediante el cual indicó que el Consejo General Universitario no tiene facultades para impedir que la Contraloría General lleve a cabo las funciones que le señalan leyes federales y estatales, puesto que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica, el Consejo General Universitario es el órgano de gobierno de mayor jerarquía de la universidad. Por otro lado, se ofreció a volver a leer el documento para que quedara más claro a quienes habían manifestado no entender bien el tema del que se trataba y el alcance del acuerdo que se proponía adoptar. Se disponía a dar lectura nuevamente al documento, pero fue interrumpido por el Dr. Luis Fernando Macías García, quien llamó a una moción de explicación.

El Dr. Luis Fernando Macías explicó que no se trataba de que el documento fuera nuevamente leído, sino de que los consejeros que no habían sido suficientemente enterados contaran con mayor información sobre los casos que ahí se aluden, porque la sola enunciación de los números de expediente con que se les identifica no les decía nada que les permitiera normar su juicio y saber si efectivamente se trataba de un exceso al que hubiera que parar, como sucede con la suspensión del acto que se tramita en los juicios de amparo. Asimismo, agregó que tampoco bastaría con entregar el documento a la Secretaría General, pues de conformidad con el artículo 40 del Estatuto Orgánico, la convocatoria que se emita a los consejeros debe estar acompañada de la documentación correspondiente.

El Dr. Ernesto Alfredo Camarena Aguilar dijo estar de acuerdo en que hay huecos en la norma y precisó que no sólo respecto a las funciones de la Contraloría General, sino en muchos otros temas, y esta sería una buena oportunidad para abordar la tarea a fondo y revisar y actualizar íntegramente la normatividad universitaria, incluyendo la elaboración de una propuesta de modificación de la Ley Orgánica que pudiera presentarse ante la instancia correspondiente para que fuera tomada al Congreso del Estado. Por otro lado, manifestó su desacuerdo en que se propusiera la aprobación de un documento que, desde su punto de vista, se trata de un juicio de apreciación de algunos consejeros, quienes ni siquiera lo pusieron al alcance del pleno con la anticipación necesaria a la celebración de la sesión y, por ende, no se cuenta con los elementos necesarios para apoyar o no su propuesta. Respecto a la reflexión del Mtro. Víctor Luis Muro Salinas, argumentó que, efectivamente cabe la duda, pero también pudiera ser que la Contraloría sí estuviera actuando correctamente y que una mala decisión del Consejo General Universitario interrumpiera su buen desempeño.

La Q.F.B. Martha Oliva Gallaga Ortega, Directora del Colegio del Nivel Medio Superior, opinó que de la lectura pudo percibirse que el documento está muy bien fundamentado con la norma, mas no así los casos a los que hace referencia, por lo cual se sumó a la observación del Dr. Macías García y argumentó que el Consejo General Universitario requería de mayor información para estar en posibilidades de aprobar o no la propuesta que aquí había sido planteada. Por otra parte, dijo que no se requería que el documento fuese leído nuevamente, sino lo que se necesitaría es conocer a mayor detalle los casos a los que hace referencia para poder tomar una decisión suficientemente informada.



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

El Dr. Guillermo Mendoza Díaz, Director de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León, manifestó su acuerdo en que se requiere una revisión general de la normatividad de la universidad y también que se requiere de contar un reglamento de la Contraloría General. Por otro lado, también se sumó a la opinión del Presidente en el sentido de que se pueden dar muchas otras más interpretaciones de la norma que podrían coincidir o no con la que contiene el documento presentado, por lo cual advirtió que el Consejo General Universitario requiere de asesoría externa en los temas correspondientes a los órganos autónomos descentralizados, cuáles son los alcances de la autonomía universitaria y cómo se define a un funcionario público en este contexto. También coincidió en la opinión de que este órgano de gobierno no puede detener las funciones de la Contraloría General, pues ello puede tener implicaciones de índole legal para la universidad, por lo cual pidió a los consejeros tener prudencia.

El Presidente señaló, respecto lo último comentado, que la Contraloría General precisamente lleva a cabo las labores de control y fiscalización que las leyes federales y estatales le requieren a la universidad y es por eso que no consideraba conveniente aprobar el punto dos de la propuesta, para cuya discusión -dijo- se requeriría autorizar la presencia del contralor general y de la directora de asuntos jurídicos para que proporcionaran mayor información de los casos mencionados en el documento.

El Ing. Francisco Huerta Castillo puso a disposición de la Secretaría del Consejo General Universitario otro documento en el que se proporciona más información de los casos leídos en el primer escrito y afirmó que ese es el canal oficial para hacerlo llegar a los consejeros, quienes pudieran tomarse un momento para enterarse de su contenido. Acto seguido, dio lectura a dicho documento adicional, el cual se transcribe a continuación:

Referencia: expediente 13/2013

Afectaciones: *instauración de procedimiento e imposición de sanción por la realización de funciones administrativas/imposición de sanciones inexistentes en la normatividad universitaria y legislaciones externas.*

Hechos: *El procedimiento fue instaurado debido a que se omitió realizar la comprobación de adquisición de material destinado a la función académica en el plazo imputándose que actuó en el desempeño del empleo con desapego al deber de probidad que exige el uso de recursos públicos.*

El académico sí adquirió el material para el cual estaba destinado el recurso realizándose las comprobaciones correspondientes aunque fuera del tiempo para hacerlo debido a su desconocimiento del procedimiento para ello. No obstante, la Contraloría estimó que su actuar no resultaba probo y, en consecuencia, decidió sancionarla con el establecimiento de una multa por el importe de 16,341.00 pesos como resarcimiento al daño patrimonial presuntamente ocasionado.

Etapas: *procedimiento concluido/sanción impuesta.*

Referencia: *Pliego de observaciones y recomendaciones a División. Ejercicio 2013 / concluido en diciembre de 2014*

Afectaciones: *intromisión de la Contraloría General en cuestiones de naturaleza eminentemente académica.*

La revisión realizada por la Contraloría General se centró en aspectos eminentemente académicos, valorando las funciones sustantivas de los profesores de la División al realizar la revisión de cargas académicas y su desempeño en el ejercicio de las funciones de docencia,



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

investigación y extensión. También incluyó la revisión de los programas anuales de trabajo de la planta docente.

El pliego concluyó con un apercibimiento a constreñirse a satisfacer las observaciones contempladas en el pliego derivado de una evaluación arbitraria por la propia naturaleza académica de lo evaluado.

Referencia: expediente 27/2014

Afectaciones: Instauración de procedimientos administrativos por cuestiones de naturaleza académica/instauración de procedimientos administrativos a autoridades ejecutivas. **Hechos:** Se instauró luego de considerar una incorrecta aplicación de la carga académica de profesores en funciones sustantivas, estableciéndose la probable responsabilidad de las autoridades ejecutivas de la División por una inadecuada asignación de cursos al personal académico de uno de los Departamentos.

Etapas: desahogo del procedimiento instaurado.

Referencia: expediente 28/2014

Afectaciones: violación a derechos fundamentales del debido proceso.

Hechos: Se instaura procedimiento administrativo por probables omisiones y actos indebidos relacionados con la utilización de bienes e instalaciones universitarias y empleo en jornadas ordinarias y extraordinarias de servidores públicos de la Universidad.

El proceso se sustancia sin competencia de la Contraloría y sin considerar la normatividad universitaria establecida para sancionar autoridades ejecutivas planteando la posible destitución de un Director de División sin considerar que ello corresponde a la Junta Directiva, a propuesta de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario.

Las garantías del debido proceso se vulneran al impedir el ejercicio del derecho a una defensa adecuada del personal universitario; pretendiendo intimidarlo mediante la imposición de medidas de apremio por no autoincriminarse al acceder a dar contestación a los planteamientos del personal de la citada dependencia como consta en el expediente tramitado y al pretender abrir el periodo probatorio fuera de los términos de la legislación aplicable. Por otro lado, el personal de la Contraloría impidió el ejercicio del derecho a una defensa adecuada al obstaculizar la participación del defensor de los sujetos a proceso en las actuaciones correspondientes.

Etapas: instauración de procedimiento/sin resolución.

Referencia: expediente 02/2014

Afectaciones: Imposición de sanción a autoridad ejecutiva sin competencia para ello.

Hechos: La autoridad ejecutiva de una de las Escuelas del Nivel Medio Superior, fue suspendida por 15 días del ejercicio de la función, según notificó el Director de Recursos Humanos de la Universidad.

Etapas: procedimiento concluido/sanción ejecutada."

El Presidente dio lectura al artículo 40 del Estatuto Orgánico en su primero y segundo párrafo, y aclaró que el asunto por el cual fue convocada esta sesión fue para llevar a cabo la "Revisión del Régimen de responsabilidades y sanciones de la Universidad de Guanajuato" y con mayor precisión, según el segundo oficio que firmaron los consejeros que la solicitaron, "para construir



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

una agenda de trabajo", es decir, aquí no cabría el punto dos de la propuesta que hoy se presentó y, por tanto no se podría detener el funcionamiento de un órgano de control.

La Q.F.B. Martha Oliva Gallaga Ortega comentó que, de los casos que dio a conocer el Ing. Francisco Huerta en su última intervención, conoce el que refiere al Colegio del Nivel Medio Superior y considera que la sanción impuesta está justificada porque así está estipulada en leyes federales y a las cuales hay que acatar.

El Dr. Luis Fernando Macías García expresó su duda respecto a la naturaleza del segundo documento leído por el Ing. Francisco Huerta, dijo no saber si se trata de un escrito elaborado por los consejeros que solicitaron la sesión para comentar los casos citados en el primero, si son los dictámenes de la Contraloría sobre los expedientes ahí enunciados, u otro tipo de documento. Por otro lado, explicó que la situación que priva en la normatividad de la institución tuvo su origen en la forma en que se dio la transición a la actual estructura académica y administrativa de la universidad, la cual fue costosa y dolorosa, y donde se hicieron muchas cosas malhechas, no por culpa de los universitarios, sino por el ambiente político que privaba entonces; indicó que no debe olvidarse que se trató de una iniciativa presentada por un gobernador saliente, y una ley publicada por un gobernador entrante; una iniciativa discutida por una legislatura saliente, y una ley muy manoseada por una legislatura entrante que, dada la ignorancia de la vida universitaria por parte de los diputados que la componían, contiene disposiciones verdaderamente aberrantes como es el caso del artículo 60, en el que, por una parte, se establece que la Contraloría General es responsable del control y evaluación del desarrollo administrativo de la universidad y, al ser dependiente del Rector General, se convierte de facto en una dependencia integrante de la estructura administrativa de la rectoría general, pero, por otra parte, ese mismo artículo la convierte en una especie de agencia para la ejecución de disposiciones totalmente ajenas a la universidad; lo que a todas luces es contradictorio del buen desarrollo de la vida colegiada institucional.

El Mtro. Jorge Alberto Romero Hidalgo dio lectura a la fracción V del artículo 59 de la Ley Orgánica, la cual establece que *"corresponde a la Comisión de Vigilancia aprobar los criterios y lineamientos en materia de control, fiscalización y evaluación que le proponga la Contraloría General"* e informó que la Comisión de Vigilancia ha solicitado esa propuesta a ese órgano de control una infinidad de veces, pero que éste no la ha presentado y por eso hay un vacío que le ha permitido el avasallamiento de profesores y autoridades ejecutivas, que precisamente es lo que los consejeros que solicitaron esta sesión extraordinaria quieren evitar que se siga dando. Es por ello -agregó- que se insistía en mantener la propuesta original presentada por el grupo de consejeros, pues no tendría sentido que esa situación se siguiera dando mientras las comisiones permanentes del Consejo General Universitario estuvieran llevando a cabo la revisión integral del régimen de responsabilidades y sanciones.

Martín Gorzález Guzmán, representante de los alumnos de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, argumentó que la lectura que se dio del documento fue tan clara que incluso alguien que no es abogado podría entenderla perfectamente y que si no se habían incluido los detalles puntuales de los casos ahí referidos es porque los expedientes están redactados en un lenguaje más técnico, lo que no es el propósito. En cuanto a la autonomía universitaria -afirmó- que la universidad es tan autónoma, que justamente los presentan forman parte de un órgano de gobierno. Por otra parte, opinó que no sería conveniente autorizar la presencia del Contralor General porque el tema que se discutía lo involucra. Por último, comentó que le pareció muy oportuna la analogía que hizo el Dr. Luis Fernando Macías García de este tema, al compararlo con la suspensión del acto en el juicio de amparo, ya que ésta se hace para detener la intervención de la autoridad, con el propósito de no causar un daño irreparable y, en



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

este caso, se trata justamente de que no se afecte de ese modo a los profesores y, como consecuencia, a sus alumnos; es por tal motivo -concluyó- que debía mantenerse el punto número dos de la propuesta presentada por el Ing. Francisco Huerta.

El Dr. Ricardo Contreras Soto señaló que le sorprendía la manera en que en esta sesión se querían resolver los asuntos, pues tal parece que se trataba de apurar la toma de los acuerdos mediante una avalancha de votos y que por esa razón era que se apreciaba cierta premura para someter a votación la propuesta, lo que -afirmó- no es ético. En tal sentido, invitó a los consejeros a no resolver la decisión a modo de un manejo aplastante por mayorías no razonables y sí, en cambio, apoyar la postura de que se revisara caso por caso para determinar si, efectivamente, la Contraloría había actuado injustamente y había violado derechos de profesores y autoridades ejecutivas. Asimismo, manifestó su conformidad en el sentido de que él como funcionario público sea observado en bien de la transparencia pues ésta -afirmó- debe prevalecer en el manejo de los recursos federales y estatales que recibe la universidad.

La Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas, Rectora del Campus Celaya-Salvatierra, argumentó que ninguna de las atribuciones que la Ley Orgánica señala a la Contraloría General la faculta para aplicar sanciones, en todo caso, sólo le permite proponerlas; y se sumó a la opinión de que la norma contiene varios vacíos que hay que llenar, por lo que manifestó su respaldo a la propuesta de que se revisara integralmente el régimen de responsabilidades y sanciones, así como a que la Contraloría General se abstuviera de aplicar sanciones y suspendiera los procedimientos instaurados, en los supuestos antes referidos en tanto se realiza la revisión. Por otra parte, aclaró que la propuesta no era que ese órgano de control dejase de cumplir con sus obligaciones, sino que únicamente que suspendiera temporalmente los procesos a los que se había hecho referencia, hasta que se determinó si se tiene o no razón y que, en su caso, se apliquen las sanciones que correspondan conforme a derecho si es que alguien actuó mal, pero en tanto, la Contraloría General debe continuar realizando todas las demás actividades que deriven de sus responsabilidades, como por ejemplo la recepción de la declaración patrimonial de los universitarios que tienen obligación de rendirla, así como el seguimiento al logro de metas.

El Dr. Alex Ricardo Caldera Ortega, representante del personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León, hizo referencia al artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios citándolo textualmente: *Artículo 7.- Los Organismos Autónomos, por conducto de sus órganos de control, instaurarán y sustanciarán el procedimiento de responsabilidad administrativa respectivo y aplicarán las sanciones a que se refiere esta Ley, a los servidores públicos adscritos a los mismos. Tratándose de los titulares de dichos organismos, sean unipersonales u órganos colegiados, corresponderá a sus órganos de gobierno, instaurar y sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y aplicar las sanciones que correspondan.* En tal sentido argumentó que, si la Contraloría General no está actuando en conjunto con los órganos de gobierno, entonces está violando la ley y, por tanto, el Consejo General Universitario debía adoptar el acuerdo propuesto como número dos para evitar que eso siga ocurriendo.

El Dr. Javier Corona Fernández, Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato, expresó su adhesión a la propuesta de que se revise integralmente el régimen de responsabilidades y sanciones. Asimismo, se pronunció en favor que se apliquen las leyes en materia del buen uso de los recursos de la universidad, pero que se acaten las disposiciones que acotan la actuación de la Contraloría y dejan en manos de los órganos de gobierno la aplicación de sanciones, pues ese órgano de control actúa como una especie de fiscalía especial que persigue, cuando en realidad debería orientar y trabajar más en un sentido de apoyo



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

y orientación a la universidad, en vez de estar detectando puntos en los cuales puede castigar a los enemigos, porque no todos los profesores están obligados a saber cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir cuando reciben recursos para sus proyectos de investigación. Al respecto agregó que de los casos aludidos hay uno que llama mucho la atención porque se pretende sancionar a un director de división por la asignación de la carga académica de los profesores, lo cual es una intromisión inadmisible por parte de la Contraloría General, es un exceso que debe detenerse, pues pasa por encima de los procesos de planeación de los departamentos, de los consejos divisionales y de las responsabilidades que tienen los directores de división.

El Dr. Luis Fernando Macías García solicitó que alguien que conozca de jerga jurídica explicara qué significa "sustanciar" porque tal acción está referida tanto en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, como en la fracción VIII del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. Respecto al significado del término jurídico, indicó que él lo entiende como las acciones de documentar, reunir todas las evidencias necesarias y compilar todos los elementos racionales que sirvan para legitimar un acto. Agregó que, si su interpretación es correcta, la Contraloría se estaría pasando por alto una parte de la fracción VIII del artículo 7 de la Ley Orgánica porque de acuerdo con esa disposición, a ese órgano de control le corresponde "*sustanciar los procedimientos disciplinarios por actos u omisiones de los servidores públicos*", y luego, en una segunda parte, dice que lo hace "*comunicando al superior jerárquico la imposición de las sanciones* - ", lo que significa que la competencia de la Contraloría es sustanciar y comunicar al superior jerárquico para que éste sea quien imponga la sanción, pero entonces lo que falta es que el Consejo General elabore la normatividad para asegurar que dicho superior jerárquico, ya sea el Director de División o alguien más, efectivamente aplique la sanción que corresponda según los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

El Dr. Guillermo Mendoza Díaz observó que la discusión había evidenciado las lagunas que se tienen en la normatividad al respecto de los temas abordados: no se precisa quién es el órgano ejecutor, a quién le debe instruir sobre las sanciones; eso no está en ningún reglamento -dijo- y agregó que el Consejo General tiene que ser muy prudente respecto a las decisiones que se adopten en esta sesión y manifestó su convicción de que lo más conveniente sería tratar punto por punto en vez de votar todo en un acuerdo único, porque se requiere un análisis detallado de cada uno de ellos y porque además aquí se sentará un precedente. En cuanto a cada una de las tres propuestas, señaló que estaba de acuerdo en que se llevara a cabo la revisión integral del régimen de responsabilidad y, en su opinión -dijo- todos los consejeros explícita o tácitamente habían manifestado lo mismo, pues no se habían escuchado opiniones en contra; respecto al informe del contralor, comentó que quizá algunos apoyaban la propuesta y otros no; y sobre la propuesta de que la contraloría suspenda la aplicación de sanciones, argumentó que debe privar el principio de presunción de inocencia (todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario) y, portanto, sería conveniente determinar que dicho órgano suspendiera temporalmente esos procesos, pero habría que precisar el plazo de vigencia de la suspensión. Para concluir su participación, propuso que ya se fueran adoptando decisiones porque ya se ha discutido mucho, y comenzar por resolver si se votaría cada una de los tres propuestas por separado o en bloque.

El Presidente comentó que varias de las intervenciones que se habían hecho habían dado argumentos basados en información incompleta que no presentaban todos los ángulos de cada tema, lo que había dejado de manifiesto que ningún consejero tenía evidencias contundentes para asegurar que ha habido violaciones a los derechos universitarios o que se hayan presentado



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

excesos; en todo caso -agregó- para que se pudiera afirmar lo contrario, se tendría que tener información detallada de cada uno de los expedientes aludidos en los escritos aquí presentados. También argumentó que si se aprobara la propuesta para que la Contraloría General suspenda sus procesos, el órgano de control estaría incumpliendo obligaciones que le mandan diversas leyes, incluso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que desde el artículo 134 las deriva a las legislaciones federal y estatal. También externó su reflexión en el sentido de que la universidad no contó con una contraloría hasta que adquirió el carácter de organismo autónomo y, desde ese momento, una vez creado, ese órgano de control asumió las funciones que derivan de diversas leyes, como por ejemplo la recepción de la declaración patrimonial de universitarios que caben en la figura de funcionarios públicos según la ley correspondiente, independientemente del nombramiento que ostenten como autoridades ejecutivas, personal directivo de confianza o mandos medios. Asimismo, hizo énfasis en señalar que, de considerarse la segunda propuesta contenida en el primer documento leído, se podría tomar una decisión equivocada que pondría en riesgo a la institución de faltar a diversas leyes estatales y federales, lo que, además de ser innecesario, sería incongruente con el actuar del órgano de gobierno de mayor jerarquía de la universidad.

El Mtro. Antonio González Arroyo observó que hasta ese momento de la discusión ya se habían manifestado con claridad dos posturas, una en el sentido de que se decidiera individualmente cada uno de los puntos propuestos en el escrito, y otra que se resolviera en bloque como un solo acuerdo y, por tal motivo, llamó que se procediera a realizar la votación en ese instante.

Diego Amando Andrade Aldana, representante de los alumnos de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León, consideró importante la inclusión del punto número dos porque -argumentó- a la Contraloría no le compete la aplicación de sanciones por asuntos académicos.

El Presidente le aclaró que la Contraloría General no ha intervenido en asuntos académicos y que era justamente por ese tipo de argumentos basados en información incompleta que consideraba improcedente la aprobación del punto dos.

El Dr. Ricardo Contreras Soto invitó a los consejeros a considerar que en la discusión no se habían tocado supuestos como el de que alguien robe, manipule en su beneficio personal los recursos de la institución o se haya llevado cosas y, por tanto, esas malas prácticas no habían sido incorporadas a la valoración que cada consejero había hecho para nomar su criterio para el análisis de la propuesta presentada, por lo que los invitó a razonar al respecto y afirmó que contra esa gente las sanciones tienen que ser ejemplares. En tal sentido -dijo- la decisión del Consejo General Universitario tiene que favorecer la investigación que asegure que nadie está haciendo mal uso de los recursos públicos asignados a la institución.

El presidente destacó la propuesta del Mtro. Antonio González Arroyo para que se vote entre las dos opciones por él señaladas, aunque aclaró que si la mayoría se pronunciara en favor de resolver en un solo acuerdo la aprobación o no de los tres puntos considerados en el primer escrito leído, entonces habría consejeros que, de conformidad con el artículo 30, fracción VII, del Estatuto Orgánico, tendrían que excusarse de participar en la votación por estar involucrados personalmente en procedimientos que la Contraloría General ha instaurado.

Ante la pregunta de algunos consejeros pidiendo que informara de quienes se trataba, el Presidente se dispuso a dar esa información, pero el Mtro Antonio González Arroyo llamó a una moción de explicación para señalar textualmente lo siguiente: "Señor Rector, este órgano de gobierno y los miembros que lo integramos trabajamos bajo la buena fe. Nunca un procedimiento



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

puede determinar la culpabilidad de alguien por el solo procedimiento. Yo llamo ahora a que tenga precaución en mencionar a las personas, que yo no tendría ningún inconveniente más que el aspecto universitario, de que el ser sujetos implica que se tengan que excusar: uno, su decisión será, pero no es una imposición; dos, que precisamente de eso se trata, ¡qué bueno que ya llegamos al punto de la votación! Hay un principio de legalidad que no nos permite cerrar los ojos: la autoridad solamente puede lo que la ley le permite; se han evidenciado cosas que no le permiten a la Contraloría, pero no estamos erigidos en un jurado; estamos trabajando en el mismo sentido, todos hemos abonado a lo mismo, qué bueno que se regule, qué bueno que las comisiones trabajen; el Dr. Fernando decía: que llamen especialistas; aquí están sentados los especialistas, señor, usted es un especialista en esto, un especialista en la convivencia, en la razón de la universidad, en los motivos que nos detallan, no es una parte, señor, todos somos especialistas porque aportamos a la disciplina, a construir una universidad sana, señor. Esto no se debe tomar como un tribunal, no estamos castigando a nadie, le sugiero que no lo vaya a hacer; al decir, bajo una instrucción, que bajo un criterio de presidencia, porque somos un todo, somos pares, alguien no pudiera tener derechos porque solamente transita. Es una moción de respeto. Quiero escuchar argumentos jurídicos y me da mucho gusto porque la sensibilidad ha sido siempre la misma: estamos tomando una posición de órgano de gobierno y estamos decidiendo responsablemente, y se construyó la propuesta responsablemente. Sería injusto que diga: *primero mátenlo y después virguan*, no sé dónde lo escuché, pero es una invitación, señor."

El Presidente agradeció al Mtro. Antonio González Arroyo y le aclaró que a lo largo de toda la sesión había mantenido esa actitud de diálogo, incluyente y de total apertura. Sin embargo, precisó que habiendo consejeros que están involucrados en procesos abiertos por la Contraloría, su imparcialidad se vería comprometida en la votación del punto dos, por lo que, de acuerdo con la normatividad interna, tendrían que excusarse.

El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector del Campus Guanajuato, indicó que en el funcionamiento de los órganos académicos colegiados existen dos figuras: una que se llama excusa y otra denominada recusación. Explicó que la recusación opera cuando alguien observa que algún integrante tiene una situación personal y es independiente de la voluntad de éste; por el contrario, la excusa atañe exclusivamente a la persona, salvo que la norma contemple supuestos específicos. Al respecto, agregó que la normatividad universitaria únicamente contempla la figura de la excusa y, por tanto, ningún consejero podría indicarle a otro que está obligado a excusarse; para ejemplificar lo anterior, citó un caso en el que primeramente un miembro del Consejo General Universitario decidió excusarse de participar en una parte de una actividad de una comisión especial, y posteriormente decidió no hacerlo durante la discusión del dictamen ante el pleno, y donde además, en la misma sesión, otro consejero lo apoyó en su decisión, declarando abiertamente que tampoco él se excusaría aunque uno de los propuestos fuera su hermano y anticipó además que votaría por él. Por otra parte, el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino consideró importante aclarar los alcances del punto dos y al respecto destacó que el Consejo General no tiene facultades para suspender ninguna de las 10 atribuciones de la Contraloría General, así como tampoco todo aquello que tiene que ver con procedimientos o sanciones; la única propuesta al respecto-indicó- es que se suspendan los procesos que se encuentren en los supuestos referidos en el documento leído que, en un caso extremo, si ninguno de los procesos se encontrara en esos supuestos, pues simplemente no se suspendería nada; aunque-precisó- que en esta sesión se había mencionado al menos dos casos en los que la Contraloría ha aplicado sanciones sin ser competente para ello. Insistió en destacar la importancia de dejar establecido con claridad el alcance del punto dos, y al respecto enfatizó que se refiere únicamente a los procesos que se encuentren en los supuestos indicados, nada más. Además, reflexionó acerca del riesgo que traería consigo el que ese punto fuera acordado por el Consejo General Universitario,



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

ejemplificando que si la Contraloría dejara de sancionar a una autoridad ejecutiva, no se violaría ninguna norma por la simple razón de que ese órgano de control no tiene facultades para ello; tampoco pasaría nada si se encontrara que la Contraloría no se ha inmiscuido en asuntos académicos, y lo mismo si se le dijera que suspendiera el proceso a un profesor.

El Mtro. Jorge Alberto Romero Hidalgo expresó su preocupación en el sentido de que los consejeros a los que se sugirió excusarse, además de vilipendiados, fueran aporreados a consecuencia de que el Consejo General Universitario estuviera actuando como un tribunal, en que ya se les estuviera juzgando sin respetar el principio de inocencia. Justamente en respeto de dicho principio -argumentó- no se les podría pedir que se excusen; y expresó un ejemplo hipotético preguntándose qué pasaría si al concluir esta sesión, la Contraloría General le abriera un proceso a cada uno de los consejeros; al respecto respondió que entonces todos tendrían que excusarse en las siguientes sesiones que abordaran el tema.

El Dr. Luis Fernando Macías García indicó que la participación del Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino le aclaró muchas dudas que tenía. Al respecto expresó que el sentido del punto dos es sólo detener aquellos procesos impuestos por la Contraloría, cuyo fundamento legal no está claramente establecido en la normatividad universitaria respecto a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y, por tal motivo sugirió no continuar discutiendo si se incorporaba o no en los acuerdos que se adoptaren en esta sesión, porque dada esa aclaración, en nada se estaría afectando las facultades de la Contraloría, sino que únicamente se detendría la aplicación de sanciones o la continuidad de procesos de los que aún el Consejo General Universitario no tenía claridad respecto a que fueran procedentes de conformidad con la normatividad institucional. Dado el argumento anterior, retiró su propuesta de dividir la votación para decidir individualmente la resolución de cada uno de los puntos propuestos, y se sumó a la opinión de que se resolviera como un solo acuerdo que abarcara los tres puntos.

La Q.F.B. Martha Oliva Gallaga Ortega señaló que la información proporcionada por el Ing. Francisco Huerta Castillo no clarificaba si hubo excesos o no por parte de la Contraloría y, por otra parte, precisó que a su juicio y, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica, el único caso que ella conoce de los aludidos en esa información, sí tiene un sustento legal y por lo tanto fue bien aplicada la sanción por parte del órgano de control.

El Dr. Ernesto Alfredo Camarena Aguilar dijo que pese a todos los argumentos escuchados, aún quedaban dudas respecto al punto dos porque no dejaban de ser interpretaciones de la legislación los criterios bajo los cuales se estaría suspendiendo una facultad de la Contraloría General.

El Presidente dio lectura al punto dos de los acuerdos propuestos en el escrito que presentó el Ing. Francisco Huerta Castillo y solicitó la intervención del Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino para aclarar a qué se refieren las frases "*los procedimientos instaurados*" y "*los supuestos referidos*".

En respuesta a esa petición, el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino señaló textualmente lo siguiente: "Sí, señor presidente, muchas gracias. En el escrito que leyó el maestro, habla de cinco supuestos, nada más, de la contraloría: cuando se involucra en asuntos académicos, cuando imponga sanciones a autoridades ejecutivas, cuando sancione a personal académico y corresponda a otros órganos de gobierno, cuando no respete las garantías del debido proceso; esos son los supuestos referidos. Que se suspenda de aplicar sanciones sólo en esos, nada más, nada más. Ese sería el punto del acuerdo; todo lo demás, ahí no dice; todo lo demás sigue, todas las demás atribuciones siguen. Yo respetuosamente creo que esta decisión, lejos de ir más allá de lo que a este órgano



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

de gobierno le corresponde, más bien lo posiciona como un órgano de estabilidad institucional. No hemos normado esto, si no lo hemos normado: ¡nomémoslo! Mientras eso sucede, el contralor sigue con su trabajo, pero aquí no. Y si la contraloría dice: no existe ningún supuesto, ¡pues no existió!, pero de cualquier manera tenemos que hacer nuestro trabajo. Esos serían los supuestos ¿no sé si fui claro?"

El Presidente preguntó entonces al Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino que si después de adoptado ese acuerdo, la contraloría tendría que definir cuáles casos cabrían en esos supuestos referidos en el escrito y sólo ahí tendría que suspender la aplicación de la sanción y del procedimiento, a lo que el Rector del Campus Guanajuato respondió afirmativamente. El Presidente insistió en que aun con esa aclaración, la adopción de ese acuerdo podría ser un error porque tal vez se haría caer a la contraloría en una omisión de leyes federales al suspender algún procedimiento.

El Dr. Guillermo Mendoza Díaz pidió el apoyo del Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino para saber qué procede cuando, como en este caso, hay un vacío jurídico.

El Dr. Ricardo Contreras Soto pidió que se asentara en la presente acta que los documentos leídos durante la sesión no fueron dados a conocer con anticipación a todos los consejeros.

El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino dio respuesta al Dr. Guillermo Mendoza Díaz, indicándole que para tratar de entender lo que sería un régimen de responsabilidades y sanciones en la Universidad de Guanajuato, habría que considerar las muchas variables que hay en torno a la responsabilidad que detentan diferentes miembros de la comunidad universitaria: profesores, profesores realizando alguna determinada función, autoridades ejecutivas, las cuales no son personal administrativo, profesores que realizan funciones administrativas (como los coordinadores de programa educativo o quienes administran recursos de los POA, etc.); el artículo 62 de la Ley Orgánica señala que -citó textualmente- *"El Consejo General Universitario, con base a lo establecido en la Ley de la materia, incluirá en el Estatuto Orgánico un apartado sobre la responsabilidad del personal administrativo de la Universidad, el cual contendrá sus obligaciones específicas. La Contraloría General de la Universidad será la responsable de tramitar el procedimiento y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes"*. Aclaró entonces que, de acuerdo con dicho precepto, la Contraloría sólo está facultada para aplicar sanciones al personal administrativo; a ciertos profesores, dependiendo de la responsabilidad que detentan; pero no a la autoridades ejecutivas, porque éstas no son personal administrativo; y al respecto advirtió que para sancionar a éstas no hay quién esté facultado para ello, pues en la normatividad sólo está prevista la destitución, misma que corresponde resolver a la Junta Directiva, a propuesta de la Comisión de Honor y Justicia.

El Presidente precisó, respecto a la última intervención, que los profesores que asumen algún puesto de autoridad ejecutiva, en automático adquieren responsabilidades como personal administrativo y agregó que precisamente esos son los temas que deberán considerar las comisiones permanentes para el análisis integral del régimen de responsabilidades y sanciones de la Universidad de Guanajuato.

El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino le replicó citando el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, dando lectura a su primer párrafo (*La comunidad universitaria se integra por el personal académico, los alumnos, los miembros de los órganos de gobierno y el personal administrativo de la Universidad.*) y señalando que más adelante la misma ley establece quienes son órganos de gobierno, que pueden ser unipersonales o colegiados.



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

El Dr. Alex Ricardo Caldera Ortega, volvió a citar el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, dando lectura a la parte que señala "*Tratándose de los titulares de dichos organismos, sean unipersonales u órganos colegiados, corresponderá a sus órganos de gobierno, instaurar y sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y aplicar las sanciones que correspondan.*"

El Presidente expresó que se debe considerar que, incluso con las consideraciones que aquí se han planteado, la propuesta de acuerdo número dos incluida en el escrito leído sí podría traer consecuencias negativas para la universidad. Acto seguido sometió a votación dos opciones: 1) Que se apruebe como un solo acuerdo los tres puntos propuestos en el escrito aquí leído, con la precisión que para llevar a cabo la revisión integral del régimen de responsabilidades y sanciones del personal administrativo, académico y de los órganos unipersonales de la Universidad de Guanajuato, las comisiones permanentes de Normatividad, de Vigilancia, y de Honor y Justicia deberán contar con el apoyo de asesoría externa especializada, o 2) Que únicamente se aprueben los puntos uno y tres, con la precisión mencionada en la opción uno. En favor de la primera alternativa, se manifestaron 37 consejeros; mientras que 7 se pronunciaron por la segunda.

Acuerdo CGU2015-E4-01. Se instruyó a las comisiones permanentes de Normatividad, de Vigilancia, y de Honor y Justicia para que, con el apoyo de asesoría externa especializada, lleven a cabo la revisión integral del régimen de responsabilidades y sanciones del personal administrativo, académico y de los órganos unipersonales de la Universidad de Guanajuato y, derivado de ello, propongan al Consejo General Universitario la actualización normativa que se requiera.

Mientras se realiza dicha revisión, la Contraloría General se abstendrá de aplicar sanciones y suspenderá los procedimientos instaurados donde apliquen los supuestos contenidos en el documento que presentó el Ing. Francisco Huerta Castillo, representante del personal académico de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato ante el Consejo General Universitario, sin que ello represente la suspensión de funciones que a dicho órgano de control le competen por ley.

Asimismo, la Contraloría General deberá presentar al pleno del Consejo General Universitario un informe, con la debida justificación, sobre las sanciones que haya impuesto en los últimos tres años al personal de la universidad y de los procedimientos disciplinarios que se encuentren en proceso.

Una vez desahogado el único punto del orden del día, el Presidente declaró concluida la sesión, siendo las 12:47 horas del día de su inicio; habiéndose adoptado el siguiente

Acuerdo:

CGU2015-E4-01. Se instruyó a las comisiones permanentes de Normatividad, de Vigilancia, y de Honor y Justicia para que, con el apoyo de asesoría externa especializada, lleven a cabo la revisión integral del régimen de responsabilidades y sanciones del personal administrativo, académico y de los órganos unipersonales de la Universidad de Guanajuato y, derivado de ello, propongan al Consejo General Universitario la actualización normativa que se requiera.

Mientras se realiza dicha revisión, la Contraloría General se abstendrá de aplicar sanciones y suspenderá los procedimientos instaurados donde apliquen los supuestos contenidos en el documento que presentó el Ing.



Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario

Acta de la Sesión Extraordinaria CGU2015-E4 del día 12 de mayo de 2015

1 **Francisco Huerta Castillo, representante del personal académico de la**
2 **División de Ingenierías del Campus Guanajuato ante el Consejo General**
3 **Universitario, sin que ello represente la suspensión de funciones que a**
4 **dicho órgano de control le competen por ley.**
5 **Asimismo, la Contraloría General deberá presentar al pleno del Consejo**
6 **General Universitario un informe, con la debida justificación, sobre las**
7 **sanciones que haya impuesto en los últimos tres años al personal de la**
8 **universidad y de los procedimientos disciplinarios que se encuentren en**
9 **proceso.**

10 Autorizo:

11 Mtra. Rosa Alicia Pérez Luque
12 Secretaria del Consejo General Universitario.